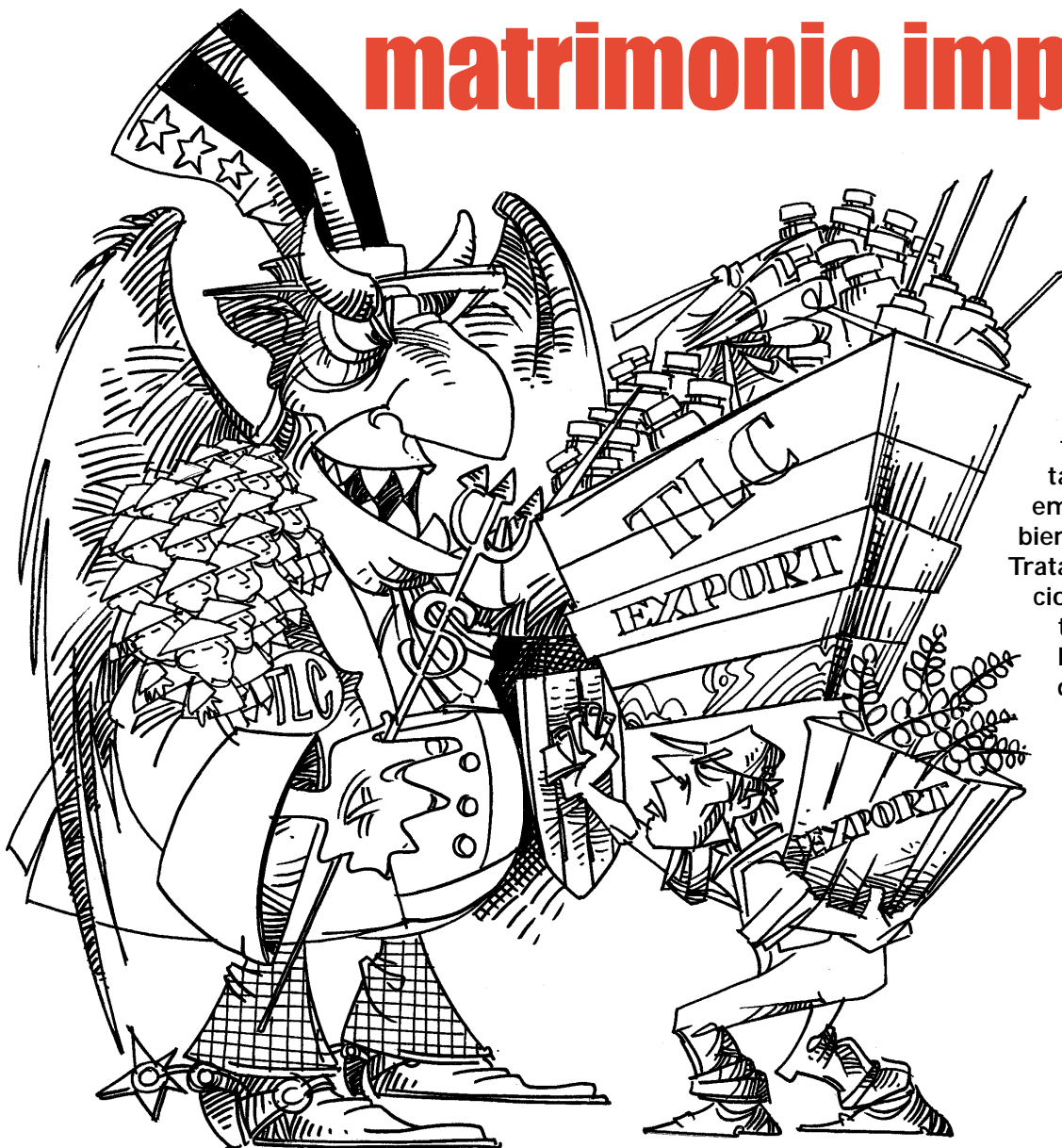


FALSAS PROMESAS DE LA POLÍTICA DE EEUU

## El TLC y el empleo: un matrimonio imposible



En los últimos años, las exportaciones hacia EEUU aumentaron, pero no aumentaron las fuentes de empleo. Ahora, el Gobierno quiere firmar un Tratado de Libre Comercio con ese país, prometiendo cielo y tierra a los trabajadores. Hasta donde se conoce, no existe nada ni nadie que garantice más empleo con nuevas exportaciones.

4 y 5

D E S T A C A M O S

## Editorial

### BOLIVIA, ESE BUEN NEGOCIO

*(...) se traspasó la posibilidad de generar riqueza a la inversión extranjera, sin que ésta se responsabilice por redistribuirla –al contrario, la concentraba– y sin un Estado que pueda exigir a estos agentes privados a pagar por lo que se extraía...*

Nuestros abuelos acostumbraban decir que Bolivia era una mesa de plata con cuatro robustas patas de oro, en la que los propietarios de esa mesa, todos pobres, se sentaban a comer en medio de su miseria. Así se referían a la inmensa riqueza de sus recursos naturales –fundamentalmente minerales– que poco y nada favorecieron a sus habitantes durante su larga historia colonial y republicana.

Hace 20 años, políticos y economistas neoliberales hicieron enormes esfuerzos para destruir esta leyenda nacional. Ellos dijeron que los recursos naturales ya no proveían las condiciones para que la economía crezca y genere riqueza, al mismo tiempo que gritaban a voz en cuello que el Estado, naturalmente, no era un administrador eficiente. Lo decían con la evidencia del momento: los precios internacionales de los minerales habían caído y el Estado, producto de esta caída y de la crisis de la deuda externa, estaba al borde de un colapso fiscal.

En su versión de los hechos, para estos políticos y economistas Bolivia tenía que

cambiar. Y así lo hicieron: abrieron la economía a los actores privados, privatizaron las empresas públicas, atrajeron, a cualquier costo, la inversión privada extranjera y buscaron integrarse al comercio mundial bajo el lema “exportar o morir”.

En realidad, el desafío de transformar la economía y la institucionalidad estatal tuvo como resultado fundamental el desmantelamiento del Estado y el debilitamiento de su capacidad de invertir y de atender a la población en sus necesidades de desarrollo. Así, se traspasó la posibilidad de generar riqueza a la inversión extranjera, sin que ésta se responsabilice por redistribuirla –al contrario, la concentraba– y sin un Estado que pueda exigir a estos agentes privados a pagar por lo que se extraía. Si volvemos al relato de nuestros abuelos, lo que decidieron hacer los políticos y economistas neoliberales fue, en pocas palabras, vender a precio módico la valiosa mesa e invitar a unos pocos, ya no pobres, a disfrutar del banquete.

De esta manera, la imagen de la mesa de plata y oro sigue siendo útil para pensar la realidad del país, pues Bolivia, desde antes de su vida republicana, fue un buen negocio para todos, menos para sus ciudadanos. Para esta afirmación existen suficientes pruebas: lo demostró la explotación de su riqueza minera; lo evidenció la explotación de hidrocarburos en el pasado y en la historia reciente; lo comprobó la permanente dependencia de la cooperación internacional y el círculo vicioso de la deuda externa.

Pero a las actuales autoridades gubernamentales no parece importarles esta situación. Al Presidente Carlos Mesa le sigue siendo indiferente que se haya vendido la mesa de oro y plata. Es más, defiende el privilegio de las empresas transnacionales sobre la explotación de los hidrocarburos y se muestra comprensivo con la cooperación internacional que lo condiciona a tomar decisiones favorables a la inversión extranjera. ¿Será que le gusta comer con los privilegiados de siempre?

## Alerta laboral

Director  
Javier Gómez Aguilar

Edición General  
Gustavo Luna y Claudia Espinoza

Escriben  
Bruno Rojas y Carlos Arze

Diseño y armado  
SALINASANCHEZ

Ilustraciones  
Gonzalo Llanos

Fotos  
CEDLA

Jaimes Freire 2940,  
Tel. 2412429, Fax. 2414625  
cedla@caoba.entelnet.bo www.cedla.org

Los artículos firmados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. La suscripción a "Alerta Laboral" puede realizarse gratuitamente en las oficinas del CEDLA. La Redacción recibe cartas, aportes y sugerencias

Café tinto



**Ya van seis meses en los que el pueblo alteño espera una solución al grave problema del servicio de agua potable y alcantarillado. Ya se realizaron paros cívicos y marchas, se cambiaron tres autoridades de Saneamiento Básico, el gobierno hizo promesas, pero la transnacional Aguas del Illimani sigue administrando el servicio sin que haya cambiado nada.**

Desde noviembre del año pasado, el pueblo alteño espera una solución al grave problema del servicio de agua potable y alcantarillado. En la ciudad de El Alto, donde vive aproximadamente un millón de personas, entre residentes y temporales, existen al menos 68.400 personas que carecen de ese servicio pese a que se encuentran en barrios en los que hay red de agua potable y 129 mil personas no cuentan ni con red y menos conexiones de agua.

#### EL SERVICIO CARO Y DEFICIENTE

Si sumamos, tenemos que 197.400 no pueden acceder al servicio de agua potable no sólo porque la empresa transnacional Aguas del Illimani incumplió con la cobertura que se comprometió, sino porque el alto costo del servicio impide que muchas familias puedan pagar por el derecho de tener agua. Según datos de la Superintendencia de Saneamiento Básico, la empresa cobra 196 dólares por el derecho de conexión para agua potable y 249 dólares por la conexión para alcantarillado sanitario, lo que resulta un total de 445 dólares.

A parte de estos elevados costos, un recorrido por las zonas da cuenta de que varias calles que sirven para transitar, también son canales por los que corren las aguas servidas que rebalsan por las cajas taponeadas, porque la empresa no hace la limpieza que corresponde. La zona 16 de Julio, por donde pasa el río Hernani, es un ejemplo de la contaminación, donde han brotado epidemias de infección en la piel de niños y adultos. Así consta en los informes de las juntas vecinales.

Además, en las inspecciones que realizaron los vecinos con funcionarios del gobierno y de la empresa, se confirmó que los sistemas de purificación son tan deficientes que en lugar de procesar el agua por nueve días, como fijan las normas ambien-

## EL ALTO EN LA DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

# Cuando el agua deja de ser un derecho

tales, se toma sólo un día o dos para obtener la "calidad" del agua para el consumo.

Estas son algunas muestras de cómo Aguas del Illimani ha tratado mal al pueblo alteño, de tal modo que mucha gente prefiere mantener pozos ciegos dentro sus casas, escuelas e incluso centros de salud. Otros vecinos están obligados a comprar agua en turriles de 150 litros por el precio de cinco bolivianos.

#### EL RESULTADO DE LA PRIVATIZACIÓN

En siete años de privatización del servicio, los resultados son penosos para una población mayoritariamente empobrecida por las políticas de libre mercado aplicadas en Bolivia desde 1985. Según datos oficiales del 2001, la ciudad de El Alto evidenció un nivel de pobreza de aproximadamente el 75 por ciento, en tanto que la población en extrema pobreza era de 39,7 por ciento.

La población más afectada por el servicio de Aguas del Illimani inició movilizaciones desde noviembre pasado exigiendo al gobierno una solución al problema del agua.

Frente a la presión social, el gobierno se comprometió por escrito a rescindir el contrato con la empresa, pero a la fecha arguye que no lo puede hacer porque no puede romper con la transnacional y poner en riesgo la inversión extranjera que ésta hizo.

#### SEIS MESES Y MÁS DE ESPERA

Ya van casi seis meses de conflicto por el agua en El Alto. En este lapso, ya se realizaron paros cívicos y

marchas de los vecinos; se cambiaron a tres superintendentes de Saneamiento Básico y nada. Por esta situación, la Federación de Juntas Vecinales exige una señal inmediata antes de retomar las movilizaciones, mientras la empresa sigue administrando el servicio y sigue aumentando las tarifas en algunas zonas.

Se sabe que en la economía de mercado el agua ha pasado a ser una mercancía más que las empresas negocian en todo el mundo. Aguas del Illimani es parte de esa maquinaria, porque es la subsidiaria de la empresa Suez Lyonnaise des Eaux, una de las 10 más grandes transnacionales del agua en el mundo.

Frente a sus intereses, todavía existen quienes creen que el agua es un derecho de todos, por eso en El Alto se escuchan voces que en aimará dicen "inakiw umax", es decir, el agua es gratis porque es un regalo de la naturaleza.



Los datos dan cuenta de que en Bolivia, el sector industrial es muy débil para encarar la competencia en el mercado de EEUU. Si bien en los últimos años han aumentado las exportaciones a ese país, esto no ha sucedido con las fuentes de trabajo.

## TLC: ¿quién asegura más empleos para los bolivianos?

En medio del clima de incertidumbre que vive el país, el Gobierno se ha dado a la tarea de negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, prometiendo más exportaciones y más empleo para los bolivianos. ¿Será así realmente? Veamos qué pasó con la política de apertura comercial que se inició en los años 80 y que el Gobierno pretende continuar con el TLC.

### LA RECETA QUE EMPEZÓ EN LOS AÑOS 80

Con el neoliberalismo, el Estado transfirió sus roles productivos al capital privado transnacional y nacional, dejando a las fuerzas del mercado la solución de los problemas que afectan la capacidad productiva del país.

Se abrieron nuestras fronteras, se firmaron acuerdos comerciales con varios países y, desde entonces, los capitales y las mercancías prácticamente no tienen restricciones en el país. Así, Bolivia se convirtió en uno de los primeros países en asumir la apertura comercial y hoy es una de las economías más abiertas de la región.

Bajo el lema "exportar o morir", el Estado aseguró que el comercio sería el motor del desarrollo, que se traerían inversiones y que se impulsaría la industria para superar ese mal crónico de la producción en el país que se reduce a unas cuantas materias primas y productos sin valor agregado. Desde el Palacio de Gobierno, se dijo que todo este conjunto de cambios daría mayores posibilidades a la creación de empleo.

### ¿QUÉ PASÓ CON EL EMPLEO?

Las exportaciones durante los últimos 13 años, subieron de 922 millones de dólares el año 1990, hasta 1.568 millones el 2003. Un 13% de esas exportaciones tuvo como destino Estados Unidos.

Entre 1996 y el 2003, la mayoría de las exportaciones a Estados Unidos, un 61%, se realizó sin ningún régimen de preferencias arancelarias específicas. Sólo un 33% de las exportaciones correspondieron al ATPDEA, es decir a la Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga en los Andes que sí tenían preferencias arancelarias.

Un estudio realizado por el CEDLA, sobre los beneficios y costos del ATPDEA en la economía boliviana, establece que sus efectos fue-

ron positivos para la producción y negativos para el empleo, en los años 2001, 2002 y 2003.

Estas cifras se obtuvieron separando los productos exportados en dos grupos: el de productos que influyeron en la generación de producción y empleo, y los que eliminaron producción y fuentes de trabajo.

Durante los tres años analizados, el primer grupo contribuyó con la generación de 40 millones de dólares adicionales de producción y 823 nuevas fuentes de trabajo. En este grupo se encuentran productos como puertas de madera, prendas de vestir y joyería en oro, entre otros, que ya tenían acceso a mercados en EEUU desde los años 90.

Los productos del segundo grupo registraron una disminución de 25 millones de dólares en producción y la pérdida de 1.837 fuentes de trabajo. Aquí se encuentran productos como minerales de tungsteno, óxidos de boro, bolsos de mano de cuero, flores y capullos frescos, entre otros.

### UNA INDUSTRIA DÉBIL

Contrariamente a lo que se esperaba, desde que se inició la apertura irrestricta, Bolivia importa más de lo que exporta. Los sectores agrícolas y la industria minera e hidrocarburífera con mayor oferta exportable generan una escasa demanda de mano de obra.

Estos sectores privilegiados por el modelo neoliberal mantienen lazos débiles con el resto de la economía nacional. La industria manufacturera continuó con un aporte reducido en torno a un 15%. Más de un tercio de esas exportaciones corresponde a soya, girasol y sus derivados. Los rubros de textiles y prendas de vestir no pasan del 4%.

Para ver el bajo grado de producción que caracteriza al país basta ver que la industria manufacturera participa sólo con un 20% en el empleo urbano; es decir apenas 2 de cada diez trabajadores se ocupa en el sector industrial.

### EMPRESAS GRANDES, PERO DÉBILES

Según el CEDLA, sólo un grupo de 20 empresas se benefició de las exportaciones realizadas a Estados Unidos. Sin embargo, son empresas "grandes" con una gran debilidad: dependen de mercados inestables, dinámicos y exigentes, donde compiten por volúmenes, precios y calidad.

Lograron mantener tasas constantes de exportación a partir de pedidos con especificaciones de afuera y no con productos de marca propia. Como reveló un empresario del rubro: "en los hechos, Bolivia no es exportadora, es subcontratista, no exporta lo que quiere exportar, sino lo que nos quieren comprar".

### UN CAMINO SIN PROTECCIÓN

Es decir que en países como Bolivia no existe la capacidad ni posibilidad de decidir sobre la producción y la economía. Por eso, los empresarios para asegurar sus ganancias, toman decisiones que

se caracterizan por tener una visión de rentabilidad de corto plazo.

Como no pueden controlar precios, tasas de interés, impuestos ni condiciones externas, el camino más fácil es la reducción de los costos laborales.

Antes de la apertura, el 94% del empleo industrial era permanente y estaba protegido por los beneficios que les daba la ley. Desde 1985, el porcentaje de trabajadores estables en este sector se ha reducido al 70% y quienes tienen una jornada superior a 48 horas semanales pasaron del 12,8% al 44%, es decir que casi la mitad de los trabajadores, trabaja durante más horas en las empresas.

En el año 2000, solamente el 60% de los trabajadores de la industria empresarial tenía acceso a prestaciones de salud y de seguridad social.

En el caso de las mujeres, cada vez son menos las obreras empleadas por las fábricas, debido a los empresarios no quieren cargar con los costos de maternidad. Y cada vez son menos los empleados antiguos, porque las empresas no quieren acumular beneficios sociales. Por esto, las grandes fábricas contratan a jóvenes —principalmente varones— menores de 25 años, con mayor capacidad física y menor resistencia a la disciplina.

Mantienen bajos los salarios y pagan por rendimiento, remuneración a destajo o por bonos de producción, lo que termina en un aumento de horas de trabajo sin remuneración y libre disponibilidad de trabajadores en horarios nocturnos y en días feriados o domingo.

Tienen una rotación anual de personal de entre 25 y 30 por ciento de su fuerza de trabajo, porque mantienen estables a un grupo de trabajadores antiguos, con capacidad y experiencia para dar continuidad a los procesos productivos a quienes se les da más tareas que cumplir y que coexisten con un amplio porcentaje de obreros eventuales, mano de obra descalificada, fácilmente sustituible y subcontratada, es decir, más trabajo para los asalariados y más precariedad para los subcontratados, los eventuales, los desocupados.



Microempresarios, COB, CSUTCB, FEJUVE y sectores fabriles se oponen al TLC porque lo ven como una amenaza a la economía de la población más empobrecida. Todos preguntan, ¿cómo vamos a enfrentar y competir con las transnacionales?

## LA PALABRA DE LAS ORGANIZACIONES FRENTE AL TLC

# “Estados Unidos nos quiere manejar por todo lado”

“Si la gran empresa piensa que nos van a contratar a los microempresarios, como su mano de obra, están equivocados”. Así habla don Walberto Quispe, cuando se refiere al Tratado de Libre Comercio (TLC) que el gobierno pretende firmar con Estados Unidos.

En su calidad de presidente de la Asociación de Pequeños Productores en Confecciones El Alto La Paz (APPECAL) —uno de los pilares de la Federación de Pequeños Productores de la ciudad de El Alto—, su voz representa a 90 socios de varios barrios alteños como Villa Adela, Ballivián, Tunari, Río Seco, Santiago II...

La posición de los “costureros” es tajante, porque ellos dicen venir de una historia con múltiples experiencias en las que no recibieron ninguna ayuda gubernamental, por lo que ven en el TLC de hoy una amenaza a su economía y su producción.

### DESCONFIANZA DEL GOBIERNO

La APPECAL nació el año 2000, cuando agrupó a los costureros de chamarras, deportivos, ropa de niños, ropa de trabajo y prendas militares, momento en el que —a través de una licitación con la Alcaldía de La Paz— fue capaz de producir 5 mil chamarras térmicas en 20 días. Esta experiencia es tomada para demostrar que los microempresarios tienen muchas potencialidades que ninguna autoridad supo explorar, denuncia don Walberto.

Casi por la misma fecha, 36 talleres de confección de la misma Asociación, formaron un consorcio productivo para empezar a ver la calidad de los productos para exportación. Lamentablemente —reclama don Walberto— “nos han abandonado las autoridades del gobierno central y de la Alcaldía, no nos han dado ningún apoyo”.

En ese consorcio, se han producido prendas para YPF y algunos colegios, pero los costos de alquiler,

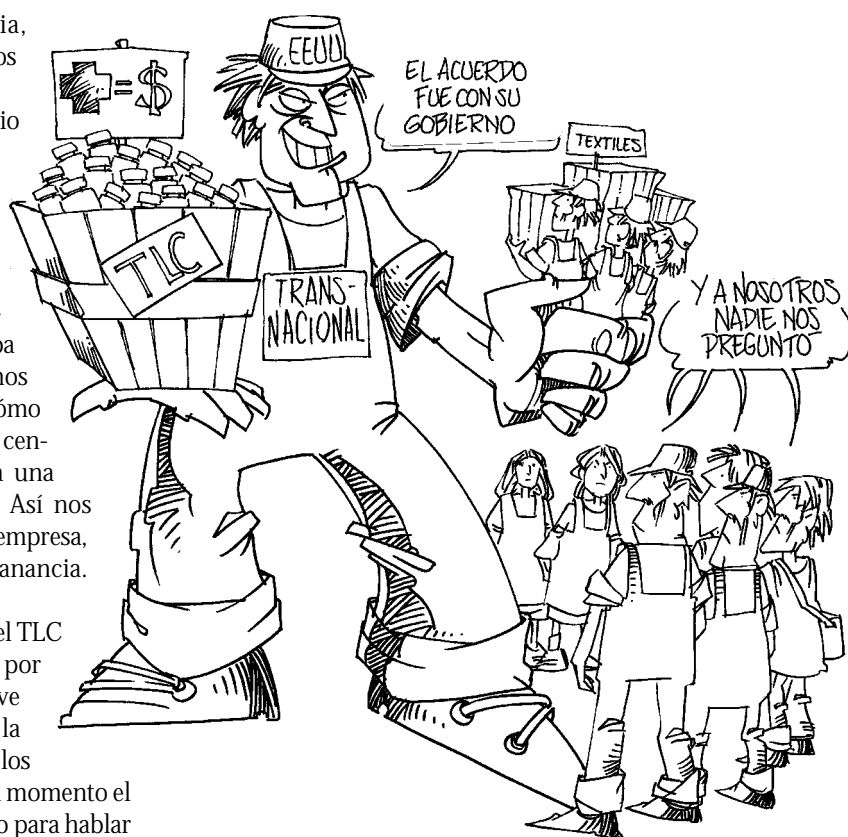
personal y maquinaria, todo fue por cuenta de los microempresarios.

“En nuestro consorcio productivo nos ha visitado el señor Juan Carlos Iturri cuando era gerente de Ametex —ahora coordinador del gobierno para el TLC— y nos ha dicho que nos iba a dar trabajo. Estábamos entusiasmados, pero ¿cómo nos quería pagar? ¡Por centavo, por minuto! ¡Era una tremenda explotación! Así nos quería manejar la gran empresa, llevándose la mayor ganancia. Eso no lo aceptamos”.

Para don Walberto, el TLC va a seguir ese camino, por eso sostiene que “no sirve porque alimenta sólo a la gran empresa. Estos son los beneficiados, en ningún momento el gobierno nos ha llamado para hablar del TLC. Por eso estamos muy molestos, toda la población de El Alto”.

### EXPERIENCIA EN LA EXPORTACIÓN

De acuerdo a los registros de don Walberto, el 80% de los socios de APPECAL está exportando textiles a Argentina, Brasil y Perú, mediante intermediarios, y en los próximos meses, ingresarán al mercado chileno a través de “la exportación directa”. Para eso la Asociación está gestionando la “importación directa” de materia prima como insumos de tela, hilos y maquinaria de punta con arancel cero. “Queremos que la nue-



va Ley de Promoción Económica que se ha decretado en El Alto, nos sirva”, afirma el dirigente.

En criterio de la APPECAL, ese esfuerzo no vale en los planes del gobierno y menos del TLC. “Si el gobierno no nos hubiera olvidado, nos estaría dando incentivos económicos. Sabemos que llega mucho dinero a nombre de la microempresa, pero las financieras ponen unos requisitos en El Alto que resulta imposible”, relata don Walberto.

Además de la experiencia en la exportación, don Walberto también defiende el empleo que los microempresarios

### FEJUVE: “Los microempresarios son también vecinos de El Alto”

Abel Mamani, ejecutivo de la FEJUVE, asume que todos los microempresarios alteños, son vecinos de la ciudad y por tanto, son parte natural de la FEJUVE. En ese sentido, respalda orgánicamente el rechazo al TLC porque encuentra que ese sector productivo entraría al mismo con mucha desventaja.

“El gobierno ha incumplido en varias

oportunidades sus compromisos con los microempresarios de tecnificarlos y buscar inversión para ellos. No corre nada de nada, y peor, nos hemos vuelto un depósito de ropa usada de EEUU. Pero no sólo eso, si ahora que no existe TLC, la Embajada de EEUU se mete en todos los asuntos dentro del país, ¿imagínese qué será con el TLC?”.

sarios pueden generar. Contra la propaganda del gobierno, él dice que en El Alto quienes pueden generar más fuentes de trabajo son los pequeños empresarios porque “tenemos la práctica del empleo familiar, somos humildes y cuando contratamos, sabemos tratar a nuestra gente”.

#### LA ORGANIZACIÓN Y LAS ALIANZAS

Por su parte, Mario Tarqui Arias quien es secretario de relaciones de la Federación de Pequeños Empresarios de la ciudad de El Alto, refuerza las palabras de don Walberto, porque considera que en los 8 años de existencia de esa organización, los gobiernos sólo han hecho promesas.

El dirigente cuestiona porqué se quiere firmar un TLC con EEUU habiendo otros mercados con los países vecinos. Por otro lado, señala que además del tema comercial existe un interés político, “porque EEUU nos quiere manejar por todo lado. Por eso nos oponemos al TLC, el fondo es político y la gran empresa tiene poder político, presiona, obtiene créditos y por eso se va a beneficiar”.

Ante tales circunstancias, la Federación resolvió unirse a la Federación de Juntas Vecinales de El Alto para poder tratar estos temas con el gobierno. Las 9 asociaciones, cada una de 80 a 100 miembros, afiliadas a la Federación aceptaron la medida, aunque en tiempos de movilización se perjudique la producción en textiles, cuero, madera, alimentos, metal mecánica y servicios.

### Fabriles: unos dicen sí, otros dicen no

Uno de los sectores en conflicto a raíz del TLC, es el de los trabajadores fabriles. No existe una posición única.

Henry de la Barra, ejecutivo de La Paz, explica que hay división, porque por un lado “hay empresarios que quieren firmar el TLC y otros que no. Es como si estuviéramos en un callejón sin salida, porque los trabajadores tenemos que preservar nuestras fuentes de trabajo”.

Mientras analizan una postura, De la Barra va a pedir una garantía al Estado boliviano para asegurar las fuentes de empleo de los obreros de las fábricas que llegarían a cuatro mil sólo en el rubro de textiles.

En cambio, la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba es más tajante. El dirigente fabril Oscar Olivera cree que “desde el año 1985 se ha desarrollado una política de fronteras abiertas, producto del 21060, que ha posibilitado la implementación de hecho del libre comercio en nuestro país, lo que ha facilitado la libre circulación de mercancías y capitales en Bolivia. Esto significó el cierre de empresas y el empeoramiento de las condiciones de trabajo de miles de obreros de las antiguas fábricas”. Como el TLC sigue esta política, “lo poco que queda de la estructura productiva, desaparecería”.

### COB: “El TLC es el capitalismo salvaje”

Desde la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares respalda un rechazo rotundo al TLC apoyado en una resolución de la comisión política del XIII Congreso de la COB, realizado en Oruro.

Para Solares, la posición de los trabajadores es simple: “En este momento, no podemos aceptar individualmente estos

tratados. Veamos, ¿una compañera que teje con una máquina de hace 20 años va a poder competir con una máquina que puede producir 20 ó 30 chompas en una hora? ¿Nuestra tecnología, que ni siquiera la hacemos, va a competir con la tecnología de EEUU? Este es el capitalismo salvaje”, concluye.

### CSUTCB: “El TLC va a generar más migración a las ciudades”

Felipe Quispe Huanca de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, considera que el TLC es una simulación del ALCA que la gente ya conoce. “Hasta el último indígena sabe, y por eso ya se han movilizad en septiembre y octubre del 2003. Ese Tratado que quiere firmar Carlos Mesa está orientado a abrir las puertas de par en par a las empresas extranjeras, y sus consecuencias van a recaer sobre nuestras raquícas espaldas”.

“Si llega el TLC, nos van a afectar automáticamente. Por ejemplo, si vamos a tejer un ch'ullo en un mes con un tejido tan fino que hasta se puede recibir agua, ¿qué va a pasar cuando vengán las transnacionales? ¿Cómo vamos a competir con las transnacionales? Por otro lado, ¿cómo vamos a resguardar nuestros recursos renovables y no renovables? El TLC va a provocar la inmigración del campo a la ciudad. La gente va a abandonar más las pocas tierras que tiene”.

Después de las jornadas de la llamada Guerra del Gas y del referéndum, se nos ha impuesto un debate que se reduce a las regalías y los impuestos sobre los hidrocarburos, sin tomar en cuenta que se trata de un recurso estratégico para el desarrollo nacional.

## DE LAS CALLES DE OCTUBRE AL PARLAMENTO

# Las elites deciden cómo será la Ley de Hidrocarburos

El pueblo boliviano se enfrenta a una nueva frustración. Otra vez corresponde a las clases dominantes y a los grupos de poder decidir sobre el destino de los hidrocarburos, porque es en el escenario político de la democracia representativa —el Congreso Nacional— donde se está definiendo la nueva Ley de Hidrocarburos.

Adelantamos que las soluciones que se pretenden imponer desde las cúpulas del poder político y económico no pueden resolver de manera definitiva el asunto de la propiedad y control de los recursos naturales, que a esta altura de la historia se ha constituido en el centro de la disputa económica en el mundo entero y en la principal reivindicación de nuestros pueblos para alentar un futuro más digno.

### LA AGENDA DE CARLOS MESA

Cuando Carlos Mesa, coreado por los medios de prensa y algunos analistas interesados, presentó como su programa de gobierno la realización de la “agenda de octubre”, muchos bolivianos anticipamos que ello significaba una maniobra política para distorsionar la demanda de nacionalización de los hidrocarburos de los movimientos sociales hacia una política favorable al neoliberalismo dando continuidad a la ley de “Goni”.

Para llevar adelante esa política, el gobierno de Mesa realizó un referéndum vinculante. A fin de crear el ambiente adecuado para la votación, el gobierno se dio a la tarea de construir una imagen que lo ubicara fuera del modelo, para lo cual anunció medidas —como el “compro boliviano”— que le permitieron ganar adhesión de sectores productivos, de la clase media ciudadana y grupos de la izquierda parlamentaria. El resultado de esa táctica fue exitoso.

### DESPUÉS DEL REFERÉNDUM

Pasados ocho meses de la consulta popular, la solución al problema de los

hidrocarburos pasó al escenario de los partidos políticos. El gobierno trasladó al Parlamento la interpretación de las 5 preguntas del referéndum, resucitando a los partidos y a la democracia pactada que habían sido fuertemente cuestionados en octubre del 2003.

Peor aún, el escenario parlamentario se ha convertido en el espacio donde abiertamente se ejercen las presiones de las empresas transnacionales, de los gobiernos de sus países de origen y de los grupos dominantes o élites locales, que finalmente serán quienes definen la orientación y contenido de la nueva Ley de Hidrocarburos.

En este contexto, suena paradójico que el gobierno acuse de “no democráticos” y hasta “autoritarios” a los movimientos sociales que se movilizan exigiendo al menos el cumplimiento del referéndum, cuando ha sido el propio Mesa quien ha delegado a unos parlamentarios que no representan a nadie, la decisión sobre el futuro de los hidrocarburos.

Por esto resulta ser una confesión de parte del Presidente cuando en sus discursos repite que Bolivia es un país limosnero que depende de la inversión extranjera y la cooperación internacional, cuyo destino es vivir de las migajas que dejan los negocios que emprenden las empresas transnacionales.

### EL DEBATE EQUIVOCADO

Este desconocimiento del profundo sentido político que tiene el tema de los hidrocarburos ha hecho que el debate sobre el contenido de la nueva Ley se reduzca a una pugna entre quienes defienden el 50% de regalías y quienes defienden la



fórmula del 18% de regalías y 32% de impuesto directo.

¿Acaso no se dan cuenta que se trata de un recurso estratégico en Bolivia y en el mundo? En la actual crisis del capitalismo —que en la región sudamericana se traduce en una crisis energética— se entiende la importancia de la soberanía estatal en la economía. Sin embargo, en el debate se ha relegado la necesidad de la industrialización de los hidrocarburos para el desarrollo nacional y su preeminencia sobre la exportación de materias primas que puede no ser excluyente del pago de 50% en regalías combinadas con impuestos.

El problema central es que quienes controlan los negocios, son las transnacionales y los actores políticos no ponen en tela de juicio sus ganancias frente a sus costos de producción; se usan datos falsos para amenazar al Estado desde fuera del país.

En otras palabras, con estos y otros elementos, se nos ha impuesto un debate que sencillamente no resuelve la demanda popular de controlar los recursos naturales, ¿hacia dónde vamos?